

La frágil legitimidad del príncipe democrático

Catalina Pazmiño

Licenciada en Ciencias Públicas y Sociales, UCE
Egresada de la Facultad de Comunicación Social, UCE

Email: katalinapp@yahoo.com.mx

Fecha de recepción: junio 2005

Fecha de aceptación y versión final: agosto 2005

Resumen

La legitimidad del gobernante democrático requiere ser construida para ser obtenida, y necesita ser permanentemente renovada para ser conservada. El problema surge cuando el discurso que le permitió ser considerado la mejor opción en una elección, se contrapone a su gestión gubernamental, debilitando e incluso destruyendo la legitimidad obtenida a través del voto. Este fue el caso de Lucio Gutiérrez, cuya actuación como presidente lo alejó del imaginario y de los relatos que, durante el proceso electoral, lo habían posicionado con una imagen distante a la proyectada por los políticos tradicionales. Esto mermó su legitimidad presidencial, y desembocó en la llamada “rebelión de los forajidos”.

Palabras clave: crisis política, representación, legitimidad, democracia, forajidos

Abstract

Democratic legitimacy needs to be built in order to be gotten and need to be constantly renovated in order to be maintained. But, when government performance is opposed to political discourse, legitimacy gotten through vote is destroyed. It was the case of Lucio Gutiérrez, whose performance as president was far away from the imaginary and the narratives that he built as candidate during the electoral process. Thereby, his legitimacy was shattered, and it lead to the named *rebelión de los forajidos*.

Keywords: political crisis, representation, legitimacy, democracy, *forajidos*

Elección o seducción democrática

Independientemente de las formas de Estado y de las formas de gobierno instauradas en diversos momentos históricos y en distintos contextos culturales, los gobernantes han puesto en escena rituales, narrativas, símbolos y representaciones a fin de conformar un discurso que legitime su poder ante los gobernados. A diferencia del gobernante monárquico cuyo poder estaba reconocido irrefutablemente en base a la “unción divina” y la puesta en escena de su poder sólo afianzaba una legitimidad obtenida *a priori*, el gobernante actual logra su legitimidad *a posteriori* en base a la “unción del voto” (Debray 1995: 20).

La legitimidad del actor político actual requiere ser construida para ser obtenida. En éste afán “el poder ha descubierto que su legitimidad depende de su capacidad de comunicar” (Balandier 1992: 152), una capacidad que no establece como su principal objetivo informar a través de argumentos racionales sino poner en escena, en el nuevo espacio público conformado por los medios, un tipo de discurso que se ha adaptado y ha adoptado la estética propuesta por éstos, especialmente por la televisión. Un discurso que, entonces, puede ser denominado mediático.

Atrás han quedado las propuestas programáticas de gobierno. Apoyado en las propuestas del marketing político, el discurso político actual se presenta más espectacular que nunca, poniendo en escena a un candidato que apela a la emotividad del ciudadano y no a su racionalidad.

Y aunque existen elementos propios de una cultura política determinada que, más allá del discurso, llegan a influir en la intención del voto del electorado, no se debe pasar por alto que es en base al establecimiento de un orden simbólico discursivo que un candidato se posiciona en el imaginario ciudadano como la mejor opción para gobernar. Así, a

través de la seducción mediática el político llega a conseguir su tan ansiada legitimidad. Sin embargo, los efectos de la seducción son efímeros.

Cuando el actor político llega al poder requiere renovar permanentemente su legitimidad para conservarla. El problema surge cuando el discurso mediático resulta insuficiente para mantener esa legitimidad, ya que es durante la gestión de gobierno cuando la acción del gobernante debe imponerse sobre la influencia de su discurso. La falta de propuestas ejecutables de gobierno hace que la praxis del gobernante se contraponga a la construcción simbólica que contribuyó a su legitimación en el poder al punto, incluso, de contribuir a su destrucción.

Un año antes de que se realicen las próximas elecciones presidenciales en el Ecuador resulta pertinente preguntarnos por qué en nuestro país el nivel de confianza, credibilidad, reconocimiento y aceptación de un mandatario, electo a través del voto popular, cae al punto de desembocar en su derrocamiento, como resultado de las presiones de descontento ciudadano. Aunque no desconocemos la existencia de otras estrategias utilizadas por el poder que, más allá del discurso mediático, contribuyen a la búsqueda de legitimación del actor político, los próximos párrafos pretenden hacer una lectura del proceso simbólico que permitió a Lucio Gutiérrez ascender al poder y, en lo posterior, observar su progresiva erosión y los modos en que ello aportó a la caída del ex-mandatario. El texto analiza, entonces, su lucha por lograr la presidencia de la República y las formas en que, durante dos años de gestión, Gutiérrez fue mermando la legitimidad que había ganado en las urnas.

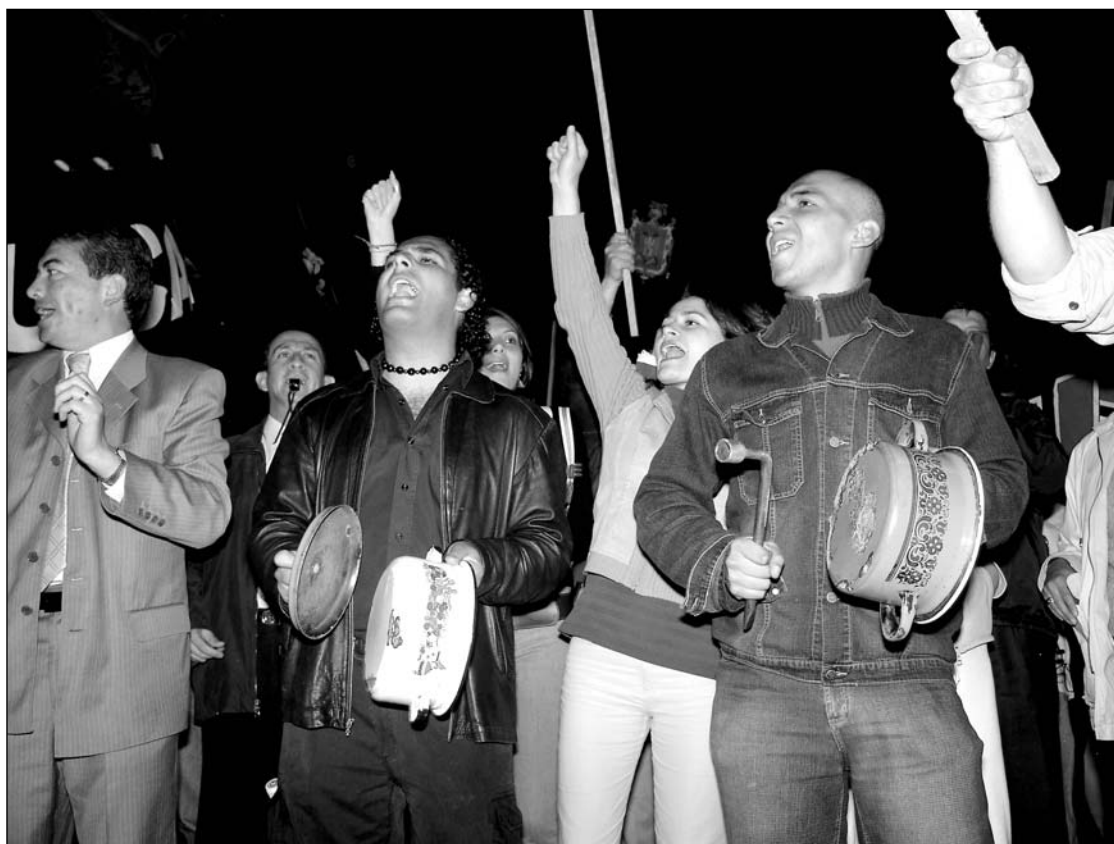
El caudillo golpista en busca del reconocimiento democrático

Lucio Gutiérrez entró en la escena pública en enero del 2000 y ya en noviembre del 2002 había sido electo presidente del Ecuador, un periodo relativamente corto en el que había logrado posicionarse favorablemente en el imaginario político de los ecuatorianos. Su participación activa durante el derrocamiento de Jamil Mahuad, su encarcelamiento y baja de las Fuerzas Armadas y su posterior lucha por lograr su amnistía fueron elementos que le permitieron construir alrededor de su persona un discurso apropiado para sus objetivos durante el proceso electoral 2002.

Y aún cuando una lectura del triunfo electoral de Lucio Gutiérrez y su legitimidad como mandatario electo exige considerar aspectos mucho más profundos que el simbolismo construido a través de los *spots* publicitarios -

como son el peso del regionalismo sobre la intención del voto del electorado, las alianzas con grupos y movimientos políticos y sociales que lo apoyaron, e incluso el quiebre del sentido de representación de los ciudadanos en los políticos y en las organizaciones partidistas que habría llevado a los ecuatorianos a ejercer un "voto protesta" contra el sistema político tradicional- no debemos olvidar que fue en base a una producción simbólica, expuesta mediáticamente, que Gutiérrez logró construir el imaginario que le permitió ganar legitimidad en las urnas, ubicándolo como la mejor opción presidencial para los ecuatorianos.

A diferencia de otros países latinoamericanos, donde la imagen de los militares está asociada a la violencia y a la violación de los derechos humanos, en el Ecuador, que también ha atravesado por periodos dictatoriales, se asocia a las Fuerzas Armadas con un imaginario de orden, estabilidad y equilibrio, mante-



niendo incluso un mayor nivel de credibilidad y legitimidad por sobre otras instituciones públicas. Según datos estadísticos proporcionados en el informe 2003 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el nivel de confianza del Ecuador en el sistema democrático era del 0,36%, y apenas del 5% respecto a los partidos políticos, datos que ubican a nuestro país con el más bajo índice de confianza de entre los países latinoamericanos. La Iglesia y los medios presentaron el mayor porcentaje de confianza con 62 y 36%, respectivamente, aún cuando estos porcentajes demuestran una considerablemente disminución respecto a 1996. Las Fuerzas Armadas también presentaban un alto índice de confianza (30%), confianza fortalecida por el reconocimiento constitucional que las coloca como garantes expresas de la integridad del Estado y de su ordenamiento jurídico.

Fue así que el discurso electoral del ex-coronel Gutiérrez, en un primer momento, supo explotar su condición de ex militar y golpista para construir una imagen sobre el arquetipo de héroe. El uso del traje “safari” fue uno de los principales símbolos utilizados por el líder de Sociedad Patriótica que, a través de tal *performance*, fortaleció una imagen que marcaba la continuidad de un relato de lucha que había iniciado en enero del 2000. Fue así que, durante los *spots* políticos transmitidos por televisión durante la campaña electoral 2002 en nuestro país, el coronel retirado manifestó haber “sacrificado su carrera militar” en su deber de velar por la democracia y de luchar contra un “gobierno corrupto”, proyectando así su imagen de mártir.

Además, a través de la publicidad política, Gutiérrez construyó un aura de honestidad proclamando su entrada al mundo de la política como un no-político con las “manos limpias”, sin “compromisos partidistas”, a la vez que ofrecía construir un país “más honesto” para las futuras generaciones. Su partido político, Sociedad Patriótica, cuyo nacimiento

obedeció a la necesidad coyuntural de institucionalizar su candidatura, calificaba su ideología como “humanista integralista”. Poco antes de candidatizarse a la presidencia, el mismo Gutiérrez manifestó: “no nos queremos encasillar en ideologías del siglo pasado. Lo que el país necesita hoy es gente que se ubique en el centro del país, pero no en el centro ideológico, sino en el geográfico para mirar el Ecuador como un todo”. Esto le permitió afianzar la construcción de una imagen alejada de los estereotipos de los políticos tradicionales, quienes se han posicionado dentro de los imaginarios de corrupción, ineptitud e ineficiencia.

Aunque pocas veces mencionó la palabra revolución, sus antecedentes de golpista lo mostraron como un revolucionario. Así lo postularon los principios de su partido Sociedad Patriótica “Somos ciudadanos que amamos por sobre todas las cosas a nuestra nación, por eso el 21 de enero del 2000, iniciamos una lucha cívica, pacífica e ineludable por un cambio profundo y radical en el país.”

Más allá de los ofrecimientos que solucionaban necesidades particulares o sectoriales, Gutiérrez enfatizó su campaña electoral en cambios institucionales como la reducción del número de diputados, el establecimiento de nuevos parámetros para el funcionamiento de los partidos políticos y la reorganización y despolitización de las cortes de justicia. Sin embargo, los continuos ataques de sus opositores políticos (principalmente de su contrincante electoral Álvaro Noboa) que ubicaban de modo insistente a Gutiérrez como un potencial dictador, obligaron al coronel retirado a redefinir su imagen. Así, durante la segunda vuelta del proceso electoral, el líder de Sociedad Patriótica trató de desvincularse de la imagen negativa de militar golpista, alternando el “traje safari” con el uso de terno y corbata.

Pese a manifestar, durante este periodo electoral, no tener ningún nexo partidista, las pretensiones nacionalistas del coronel retira-



do trataron de construir un discurso de concertación, buscando acercamientos a otros sectores de la sociedad, en los que se incluyó al sector empresarial, representantes de la Iglesia e incluso otros partidos y movimientos políticos, a fin de construir la imagen de un candidato “progresista”. Tal estrategia fue complementada con la transformación del slogan de campaña: de un simple “Lucio, presidente” utilizado en la primera vuelta a “Un presidente para todos” en la segunda.

La progresiva destrucción de la legitimidad

Las reacciones de descontento en contra de Lucio Gutiérrez se intensificaron los últimos cuatro meses de su gestión presidencial debido a su intromisión en la función judicial; sin embargo, su proceso de deslegitimación se inició mucho antes. Desde el inicio de su

mandato el entonces presidente luchó contra la desconfianza que en algunos sectores seguía causando su condición de ex militar. Posesionado en el cargo, por ejemplo, no volvió a aparecer públicamente con el “traje safari” y solicitó infructuosamente a los medios de comunicación que se dirijan a él como ingeniero y no como coronel. Era evidente que con tales acciones pretendía alejarse del simbolismo de “caudillo militar” que le ayudó a llegar a la presidencia.

Pero no solo negó ese simbolismo sino que mostró la contradicción interna de su mandato. Si bien las estrategias de legitimación durante el discurso electoral del ex coronel apelaron a la simpatía y a la emotividad del electorado, también expresaron la falta absoluta de coherencia ideológica y la falta de un programa de gobierno, las mismas que se evidenciaron en su gestión gubernamental.

Gutiérrez no solo cambió su traje. Ya posesionado en el poder, la gestión de gobierno



se apartó de su discurso electoral. Desde enero 2003, las reiteradas retractaciones de sus declaraciones, lo llevaron a una permanente caricaturización y a la consecuente ridiculización de su persona y, lo que fue más grave, a una creciente pérdida de credibilidad de su palabra como mandatario. No pudo resultar de otra manera cuando la principal función de los diferentes titulares de la Secretaría de Comunicación del Estado fue la de “interpretar” y “justificar” el sentido de las declaraciones del entonces Presidente, con el objetivo de ocultar los desatinos verbales que evidenciaban su inexperiencia e incapacidad política.

Pero más allá de la forma de conducir su persona, la corrupción -a la que en campaña había ofrecido destruir- fue la constante característica del gobierno de Gutiérrez. Según datos publicados en el diario *Hoy* el 1 de enero de 2005, durante el primer año y medio de gobierno se había hecho público al

menos 50 actos de corrupción que involucraban directamente a instituciones que dependían del gobierno central. El nepotismo y el “piponazgo”, se reflejaron en el nombramiento no sólo de ex militares cercanos a su persona sino también en la designación de familiares de Gutiérrez -directos e indirectos- en cargos públicos de alto nivel. El escándalo se hizo cotidiano en el gobierno gutiérrezista, al punto que incluso se llegó a atribuirle una presunta vinculación con el narcotráfico y con la guerrilla colombiana. Todo esto contradijo el relato de honestidad que había construido durante su discurso de campaña.

Sin embargo, aún cuando la imagen de Gutiérrez se transformó de la primera a la segunda vuelta, debido a la redefinición de sus estrategias político-publicitarias, la representación construida en base al golpe de Estado del 2000 siguió siendo preponderante.

En los días de su gobierno, no pudo impedir que se evidencien los atropellos a los derechos ciudadanos y abusos de poder realizados por las instancias gobernantes, y esto a pesar de su permanente estrategia mediática orientada a realzar las obras realizadas desde que asumió la presidencia. Entre sus acciones contrarias a la ciudadanía que recibieron un fuerte rechazo estuvo la creación de una comisión adscrita a la Presidencia, cuyo principal objetivo era preparar una lista de “enemigos” del Gobierno, entre los que incluía a dirigentes indígenas, sindicales, sociales, políticos de izquierda e incluso a periodistas. Como parte de las acciones planteadas en contra de estos “enemigos” se planteó la posibilidad de someterlos a una “confesión judicial”, de así requerirlo el Estado, poniendo en duda el reconocimiento de derechos constitucionalmente garantizados como la libertad de expresión y el derecho de confidencialidad de las fuentes. Según denuncias realizadas en diciembre del 2003 por Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) del Ecuador, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez se dieron detenciones arbitrarias e ilegales de dirigentes indígenas y sindicalistas. Se registraron, además, amenazas y atentados “anónimos” a los que fueron sometidos ciertos opositores políticos y algunos representantes de los medios de comunicación.

El financiamiento gubernamental para la creación de grupos paralelos a las organizaciones no gubernamentales de veeduría ciudadana, como Participación Ciudadana que se había constituido en un fuerte opositor al gobierno, fue una muestra más del estilo de gobernar de Gutiérrez. Por otro lado, la ruptura de sus relaciones con grupos políticos que lo apoyaron durante su candidatura, especialmente el quiebre con el movimiento indígena —una conflictiva relación que había sido establecida en términos claramente clientelares¹— lo condujeron a una soledad política que le abría un alto grado de ingobernabilidad. Tra-

tar de superar tal aislamiento le llevó a cometer errores estratégicos que marcaron su salida del poder. El principal de ellos: el acuerdo que el partido de gobierno, Sociedad Patriótica, logró con las bancadas legislativas del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) a los cuales repartió el control de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo Electoral. En su búsqueda desesperada por conseguir una mayoría en el Congreso, Gutiérrez no reflexionó sobre el costo político de ese acuerdo. Y es que el expresidente no se imaginó que, al haber marcado el camino para el retorno de Bucaram, dio la estocada final a la ya muy debilitada legitimidad de su gobierno. La impunidad que permitió el retorno del líder del PRE, terminó por destruir los relatos de honestidad, transparencia e incorrupción que había construido en su discurso electoral.

La revolución de los forajidos: expresión del desencantamiento democrático

Aún cuando las convocatorias multitudinarias en las calles se constituyeron en un factor clave en el derrocamiento de Abdalá Bucaram en 1997 y de Jamil Mahuad en el 2000, “la revolución de los forajidos” toma una serie de características que la hace incomparable con las dos experiencias anteriores.

El carácter “espontáneo” con que se ha caracterizado a las movilizaciones tal vez sea el elemento más reconocible de estas diferencias, porque aunque se ha cuestionado la dirección de la organización de los eventos de

1 La alianza de Lucio Gutiérrez con la CONAIE, durante la campaña electoral, abrió la posibilidad para que el movimiento indígena coparticipe del poder y logre alejarse de la imagen de un grupo cuyo principal recurso es su capacidad de convocatoria, de movilización y de bloqueo.

abril, el hecho de que los ciudadanos de Quito hayan salido a la calle sin la convocatoria de grupo político o movimiento social alguno es digno de ser analizado.

El agradecimiento que el entonces presidente Gutiérrez dio a los quiteños por el presunto apoyo a su gestión, ante el fracaso del paro convocado por el alcalde de Quito y el prefecto de Pichincha (el 13 de abril), pertenecientes al partido Izquierda Democrática, fue otro desacierto del entonces presidente. Tal maniobra permitió poner en debate, en el espacio mediático, el supuesto apoyo de los ciudadanos al gobernante; cuando lo que en realidad puso en evidencia fue un problema enraizado en la democracia de nuestro país: la crisis del sentido de representatividad² de los ciudadanos en las instituciones democráticas, en las organizaciones partidistas, en los “políticos de siempre” y en nuestros gobernantes.

En un país en el cual los partidos políticos han sido calificados como los más corruptos del mundo³, no es de extrañarse que el sentido de no representatividad en las organizaciones partidistas y en sus actores sea una constante de nuestro sistema democrático. Tradicionalmente se consideraba a los partidos políticos como mediadores entre los intereses de los gobernados y el Estado. Hoy las organizaciones partidistas son consideradas, en el mejor de los casos, simples maquinarias electorales. El particularismo que mueve a los partidos por sobre el principio del bien común ha resultado en una “desconexión”, calificativo usado por Andrés Mejía (2003) para describir la relación que mantienen las organizaciones partidistas con el ciudadano común.

Además, los partidos políticos al estar vi-

ciados por el clientelismo, el acomodo político y la corrupción han demostrado su incapacidad de canalizar las demandas sociales y de incluir en sus discursos y acciones los modos de sentir de la mayor parte de la población. Ello abre el camino para que sean otros actores los que asumen el papel de la representatividad, como es el caso de los observatorios de gestión gubernamental, grupos de veeduría ciudadana, foros focalizados en la reivindicación de los derechos de edad, etnia y género, e incluso los medios de comunicación.

Tal como lo reconoce Jesús Martín Barbero los medios de comunicación poseen un “valor social” determinado, no por su desarrollo tecnológico, sino porque éste es proporcional a la ausencia de los modos de sentir de la mayor parte de la población en el discurso político oficial y a la falta de espacios de expresión y negociación de los conflictos, así como a la crisis de representación de las instituciones políticas tradicionales como los partidos políticos y el parlamento (1994: 27). En este escenario, los medios contribuyen a constituir nuevos espacios de representación ya que proporcionan “algunas formas de identidad, de identificación, de proyección y de sublimación” (Ibíd. p. 28).

En los eventos de abril, una radio local, más allá de su función informativa, redescubrió el “valor social” que pueden desarrollar los medios en el ejercicio de la ciudadanía. Pese a que la mayor parte de los medios de comunicación se niegan a reconocer su papel como actores políticos, por considerar que esto atentaría contra los principios de neutralidad y objetividad promulgados por el periodismo, radio La Luna se convirtió abiertamente en un militante en contra de los desaciertos y exce-

2 La crisis de representatividad no sólo implica la pérdida de representación de los intereses sociales, del sentido de bien común de la política, sino que también conlleva la disminución de los niveles de credibilidad, confianza, reconocimiento y aceptación del sistema democrático, de sus instituciones y de sus actores.

3 Según un informe de Transparencia Internacional, publicado en diciembre del 2004, los partidos políticos de América Latina son los organismos más corruptos a nivel mundial, siendo Ecuador el que recibió la más alta puntuación (4.9 sobre 5) ubicándolo como el país más corrupto del mundo.



sos del gobierno gutierrista. De esta forma asumió el sentido de representatividad, extrañado para los partidos políticos y las instituciones democráticas. No sólo que radio La Luna se convirtió en la tribuna abierta para la expresión del descontento ciudadano -de quien se sentía perjudicado y de quien quería ser escuchado- sino que también logró canalizar esas mismas expresiones. Las redes alternativas de comunicación, como fueron el uso del e-mail y del celular, permitieron ampliar las convocatorias que se realizaron a través de sus micrófonos para manifestar contra el gobierno de Gutiérrez.

Con el objetivo de mermar el impacto de las marchas el coronel puso en escena una estrategia de relegitimación, intensificando una estrategia mediática basada, principalmente, en la transmisión de *spots* políticos que hacían un desesperado llamado de apoyo “al presidente que tú elegiste”. Al error inicial del co-

ronel retirado de subestimar las marchas de Quito, le siguió otro aun más grave: el tratar de terminar con el fenómeno social que estaba ocurriendo en las calles, a fin de asegurar su permanencia en el poder, por medio de estrategias basadas en una lógica castrense, lo que afianzaba aún más su imagen de dictador. Una lógica que pretendió anular a quien consideró su principal opositor: radio La Luna, amenazándola y posteriormente ejecutando el cierre de su frecuencia de transmisión.

Pero, además, sus estrategias militares le condujeron a dicotomizar el sentido de ciudadanía, reconociendo como ciudadanos sólo a quienes lo apoyaban, a quienes consideraba sus aliados, mientras calificaba como “forajidos” a quienes se manifestaban en contra de su gobierno. Tal palabra fue revertida semánticamente y transformada en la insignia de lucha de los manifestantes.

En un último intento por recobrar legiti-

midad, Gutiérrez anunció el cese de la Corte Suprema de Justicia, hecho que empeoró aún más su legitimidad como gobernante democrático y exaltó una imagen autoritaria.

La excesiva represión de las manifestaciones pacíficas y la amenaza de sabotear los suministros de agua potable a la ciudad de Quito, por parte de sus aliados políticos, no fueron razones suficientes para mermar las convocatorias; por el contrario, se intensificaron. Tal situación fue agravada con la llegada de turbas provenientes de la Costa y el Oriente ecuatoriano -que basaron su apoyo a Gutiérrez en arreglos clientelares- lo cual fue percibido como un ataque frontal y un atentado a la seguridad e integridad de los habitantes de la ciudad de Quito.

El pedido, a una sola voz, de “que se vayan todos” se mantuvo a pesar de que las Fuerzas Armadas retiraron su apoyo a Lucio Gutiérrez y el parlamento declaró el cese de sus funciones por abandono del cargo. Todo ello reflejaba el descontento generalizado de los ciudadanos hacia los políticos y el conjunto del sistema democrático y denotaba la necesidad de cambiar, no sólo el estilo de ejercer la política de un gobernante, sino también las formas de ejercicio de la ciudadanía.

Más allá de ciertos criterios que asumen este de tipo de acciones como desestabiliza-

doras del orden democrático⁴, “la revolución de los forajidos” debe ser considerada la expresión del ciudadano común que desea dejar de ser considerado únicamente como un sujeto pasivo en el escenario político, y que busca cambiar “el espejismo” de participación que le ofrece la democracia delegativa por una democracia verdaderamente representativa y participativa. Este será el reto que actores sociales y políticos en nuestro país deberán considerar para lograr vencer la frágil legitimidad del príncipe democrático y su incierta permanencia en el poder.

Bibliografía

- Balandier, George, 1992, *El poder en escenas: del poder de la representación a la representación del poder*, Paidós, Madrid.
- Cerbino, Mauro, 2003, “Medios, política y democracia”, en *Iconos. Revista de Ciencias Sociales* No. 16, Flacso-Ecuador, Quito, pp. 24-29.
- Debray, Régis, 1995, *El Estado Seductor. Las revoluciones mediológicas del poder*, Manantial, Buenos Aires.
- Martín-Barbero, Jesús, 1994, “Culturas populares e identidades políticas” en *Entre Públicos y Ciudadanos*, Calandria, Lima, pp. 21-34.
- Mejía, Andrés, 2003, “Partidos políticos: el eslabón perdido de la representación” en Felipe Burbano, compilador, *Democracia, gobernabilidad y cultura política*, Flacso-Ecuador, Quito, pp. 287-326.

⁴ Dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), la caída de Lucio Gutiérrez ha abierto el debate sobre la participación de esta entidad en las crisis políticas de la región. Condolizza Rice, secretaria de estado norteamericana, defiende la aplicación efectiva de “sanciones a los países que incumplan con los principios democráticos”.